

COMENTARIOS

OPERATIVO GUERRILLERO EN LA ZONA ROSA

Quizá parezca prematuro, a sólo unas semanas de transcurrido el operativo ejecutado el 19 de junio por el PRTC en la Zona Rosa, afirmar que el mismo ha dejado una huella insuficientemente profunda en la trayectoria de la crisis salvadoreña como para constituirse en punto de referencia del desarrollo del conflicto y expresión de la aguda polarización de posturas existentes en torno a éste. Sin embargo, el impacto político y militar del ataque del PRTC no puede en modo alguno desmerecerse. El histerismo suscitado en todos los aspectos de la derecha; la ingente propaganda publicitaria montada por el gobierno en torno al incidente: los esfuerzos verbales de la Fuerza Armada por subestimar la importancia estratégica del ataque, atribuyéndolo a la impotencia militar del FMLN por el presunto descalabro que el ejército estaría provocando en sus filas; son todas manifestaciones que, aunque importantes, no agotan el significado cobrado por el operativo —imprevisible quizá para quienes lo planearon, en el momento en que lo planearon— en el marco de la guerra lo cual por quinto año consecutivo desangra al país.

Más allá de los detalles con que pudiera haberse desarrollado el ataque, salta a primera vista la grotesca manipulación propagandística que los medios de comunicación realizaron del suceso. En contraste con el temeroso silencio que éstos han mantenido generalmente respecto del cruento y lento genocidio con que las mayorías popu-

lares de El Salvador han ido siendo exterminadas a lo largo de estos años de guerra, esta vez no dudaron en volcar sobre la descripción de los hechos todos los recursos de la semántica amarillista con que el grueso de los medios de prensa salvadoreños está habituado a calificar la actividad armada del FMLN, en cualesquiera de sus modalidades. Al unisono, gobierno y fuerzas de derecha coincidieron en caracterizar el suceso como “siniestro crimen,” “monstruosa matanza,” “ametrallamiento a sangre fría,” “asesinato masivo deliberado,” “repulsivo crimen,” “holocausto terrorista,” “repudiable e irracional masacre,” “matanza de inocentes.”

La relativamente tardía reivindicación del ataque por parte de la jefatura político-militar de los comandos guerrilleros urbanos “Mardoqueo Cruz,” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTC), miembro del FMLN, puso por fin un dique, si no a las tergiversaciones sobre la “sangre fría” con que “los terroristas” procedieron a ejecutar la “masacre,” por lo menos al torrente de conjetura sobre la responsabilidad de la acción. En un comunicado difundido dos días después de efectuado el ataque, el PRTC redefinió la “cruel y despiadada masacre” en términos de un operativo político-militar denominado “Yanqui agresor: en El Salvador otro Vietnam te espera;” al tiempo que salió al paso de las acusaciones relativas al carácter “indiscriminado” del ataque. Según el PRTC, “el fuego de nuestros

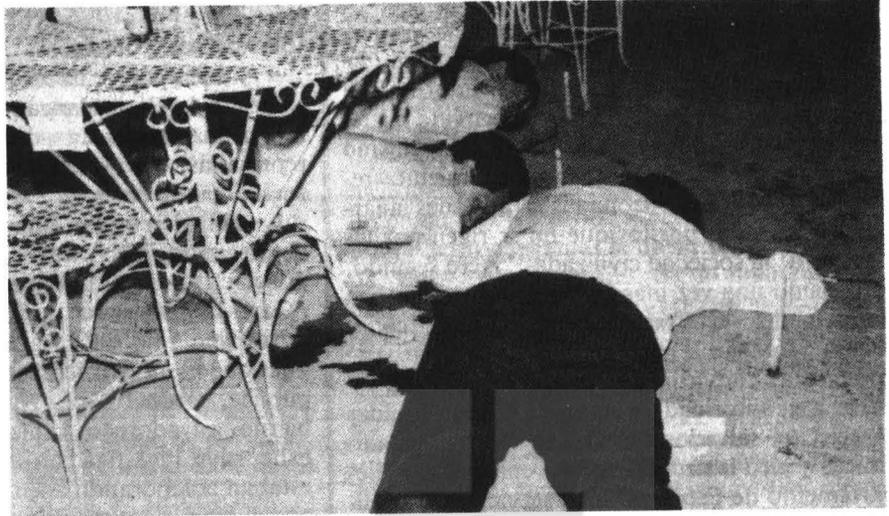
fusiles revolucionarios se concentró únicamente en los lugares donde se encontraban los asesores militares norteamericanos," pero "al momento del aniquilamiento, se suscitó un intercambio de disparos entre unidades militares de nuestra guerrilla, con funciones de seguridad inmediata al grupo de choque, contra elementos armados vestidos de civil que se encontraban en el perímetro del teatro operativo; situación que provocó que muchas personas que se encontraban en los establecimientos adyacentes se vieran comprometidas en una balacera indiscriminada... Lamentamos profundamente que por la poca capacidad técnica combativa de estos elementos del ejército vestidos de civil, nuestro pueblo haya tenido que pagar un costo social tan elevado."

Examinado desde esta perspectiva, el ataque a la Zona Rosa cobra un carácter muy distinto del que la propaganda histórica del gobierno y la derecha le adjudicaron inicialmente. Incluso bajo el supuesto de aquéllos que, arguyendo principios pretendidamente marxistas-leninistas de nihilismo ético, descalificaron *a priori* la verdad de cualquier afirmación de la guerrilla por el sólo hecho de ser de la guerrilla, la versión del PRTC debiera adquirir alguna verosimilitud a la vista de su coherencia con las declaraciones de testigos oculares quienes, mucho antes de que el PRTC diera a conocer su comunicado, aseguraron la presencia de "clientes" que respondieron al fuego del comando guerrillero. Respecto del mismo punto, habría que tener presentes también las declaraciones del COPREFA relativas al hallazgo, en Soyapango, de uno de los pick-ups a bordo de los cuales se realizó presuntamente el operativo, cuya carrocería presentaba impactos de bala y cuyos asientos mostraban manchas de sangre. En caso de conceder credibilidad a tal versión de la Fuerza Armada, resulta bastante difícil de explicar los impactos y las manchas a no ser admitiendo que el comando efectivamente recibió respuesta de fuego y que al menos algunos de sus integrantes fue herido.

Justificable o no desde el punto de vista ético, o discutible en sus repercusiones políticas, parece desacertado atribuir el operativo a la "impotencia de los sectores terroristas en la actividad militar" y la "desesperación que esos grupos de asesinos sienten debido a la derrota que están sufriendo," como en diversas formulaciones lo expresaran miembros del alto mando de la Fuerza Armada. Militarmente, los mandos castrenses

y sus asesores norteamericanos debieran adoptar la postura más realista de ubicar el ataque en el marco de la estrategia que el FMLN ha empezado a implementar a partir del primer semestre del presente año con el objetivo de expandir el teatro de guerra a las puertas mismas de la oligarquía y del estado mayor, haciéndole sentir directamente a ambos sus efectos, así como de advertir a la administración Reagan sobre los costos potenciales que podría acarrearle su progresivo involucramiento en el conflicto salvadoreño. En esta línea de interpretación, el comunicado emitido el 24 de junio por la comandancia general del FMLN no puede ser más explícito.

Haciendo un balance somero de los cinco años de la "escalada de agresión militar" patrocinada por la "política guerrerrista" de Reagan en El Salvador, el FMLN expresa que "son decenas de miles las víctimas de los bombardeos aéreos y los ataques de artillería ejecutados con los medios y la asesoría de Estados Unidos... son decenas los pueblos que están completamente destruidos por efecto de las bombas de fabricación norteamericana, lanzadas por los aviones A-37 también estadounidenses." Asimismo, "son norteamericanos los asesores que han entrenado los batallones que, aplicando líneas y políticas diseñadas por el Pentágono, han asolado cantones y caseríos" en todo el país. "Recordemos en ese sentido El Mozote, Copapayo, El Junquillo, Las Hojas, Las Canteras, Río Sumpul, Calabazo, Culebrilla, Las Bermudas, Guadalupe y muchas otras, que han dejado miles de niños, mujeres y ancianos asesinados con la más cruel barbarie..." Más adelante, la comandancia añade que "por nuestro país deambulan tranquilamente decenas de asesores militares que envenenan la mente de los jóvenes campesinos reclutados a la fuerza, hasta convertirlos en virtuales asesinos que sólo atienden las instrucciones de sus amos igualmente deambulan expertos torturadores y agentes de la CIA, muchos de ellos con la cobertura de asesores en tareas supuestamente civiles. Estos señores están vinculados a las desapariciones, a la represión selectiva contra el movimiento popular y a las medidas de control en las ciudades." En virtud de todo ello, "la operación ejecutada por nuestros comandos constituye una justa acción en legítima defensa de nuestro pueblo y nuestra soberanía contra la criminal guerra no declarada de que somos víctimas" de parte de la administración Reagan y el régimen democristiano: "la presente acción es sólo el



principio y declaramos que haremos la guerra donde estén y como estén a cuanto yanqui agresor se encuentre en nuestro suelo.”

Aun cuando sea discutible el desgaste que para la presencia militar norteamericana en El Salvador puede suponerle la aniquilación de cuatro *marines*, el operativo de la Zona Rosa constituye una muestra dicente de la capacidad de coordinación y movilización, no sólo logística, sino estrictamente militar, desarrollada por el FMLN en el centro neurálgico mismo de la Fuerza Armada, a pocos metros del estado mayor; además de representar una explícita advertencia respecto del carácter de “ejército de ocupación” que asume objetivamente, quíeralo o no, incluso en sus horas de licencia, el personal militar estadounidense estacionado en el país. En tal sentido, el ataque a los *marines* no es menos explicable que las medidas de hostigamiento y los complots fraguados por la resistencia francesa contra las tropas de Hitler o, si se quiere un ejemplo más cercano —y más caro también a la derecha— por los rebeldes afganos contra el ejército de ocupación soviético. Muchos patriotas franceses se ganaron el título de “héroes nacionales” eliminando a oficiales de las SS en circunstancias muy similares a como fueron eliminados los *marines* por el PRTC. Como declarara el comandante Shafic Handal a varios periodistas norteamericanos en Perquín el 5 de julio, “los asesores vienen, preparan tropas para que vengan a estas zonas a asesinar población; para buscarnos a nosotros y exterminarnos. La administración viene y arma a estas tropas hasta los

dientes, con un volúmen de fuego enorme, para que venga aquí a arrasar. Vienen los pilotos, sobrevuelan estos territorios, descargan aquí enormes cantidades de explosivos, y nosotros no tenemos medios antiaéreos. El día que en nuestras manos aparezcan armas antiaéreas, y tenemos derecho a ello, van a hacer un escándalo terrible. Pero bueno, vienen los pilotos y regresan al fin de la jornada, se dan un buen baño, una buena ducha y tranquilamente se van a divertir. Esto no puede seguir siendo así... Para nosotros, la lucha contra la aviación es una lucha en tierra también, no sólo en el aire. No podemos aceptar combatir a la aviación sólo en el aire, o combatir a la intervención de Reagan y a sus asesores con puros artículos y declaraciones, si ellos son eficaces para vomitar fuego contra nosotros.”

La reacción primera de la embajada norteamericana, antes de que el PRTC reivindicara la acción, fue suficientemente cautelosa. Si bien voceros de ella declararon que Estados Unidos “no serán intimidados por matones con rifles,” no se atrevieron a asegurar que tales matones pertenecieran al FMLN, e incluso admitieron que “no podría desestimarse que fuera la extrema derecha.” Muy distinta fue en cambio la reacción norteamericana tan pronto como el PRTC se responsabilizó del ataque. El asesor de seguridad nacional, Roberto Mc Farlane, enfatizó la disposición de la administración a realizar una “acción que deje en claro que los terroristas tienen un precio que pagar.” A su vez, exacerbada su susceptibilidad nacionalista por el clima de ame-

nazas y atentados desencadenados esos días en diversas partes del globo contra ciudadanos norteamericanos, el presidente Reagan no vaciló en afirmar que "los asesinos de El Salvador no son diferentes de los que mantienen a cuarenta norteamericanos como rehenes en Beirut." Al mismo tiempo manifestó que "estos acontecimientos requieren reacciones razonadas a acciones anárquicas, lanzadas por los que no se rigen por las normas de la sociedad civilizada." Acto seguido, asumiendo una vez más su vocación prometeica de defender la "racionalidad" y la "civilización" frente a las arremetidas de la "barbarie comunista," advirtió que estaba dispuesto a recurrir a su autoridad de emergencia para brindar al ejército salvadoreño asistencia militar adicional, y giró instrucciones al Pentágono, al departamento de Estado y a los servicios de inteligencia, para suministrar al gobierno de El Salvador "cualquier ayuda que sea necesaria para hallar y castigar a los terroristas que perpetraron este acto." Las amenazas o medidas de represalia derivadas de tales declaraciones han sido numerosas. Según la edición de *Newsweek* distribuida a mediados de julio, los deseos de Reagan de vindicar el ultraje de que había sido objeto la "democracia" llegaron al punto de ordenar al Pentágono que trazara planes para que pilotos norteamericanos bombardearan campamentos del FMLN en territorio salvadoreño. Los atávicos instintos de pendenciero del *cowboy* de la Casa Blanca sólo habrían sido disuadidos después de que oficiales militares del consejo nacional de seguridad le explicaron largamente las numerosas víctimas que el bombardeo causaría entre la población civil residente en los campamentos guerrilleros y, sobre todo, la incómoda situación en que pondría la autoridad del presidente Duarte, de suyo bastante precaria. Otras medidas de represalia han incluido desde la aprobación por parte de la cámara de representantes de la enmienda a la ley de ayuda exterior para permitir a Estados Unidos proporcionar entrenamiento anti-terrorista a los cuerpos de seguridad de El Salvador; y la recompensa de cien mil dólares ofrecida por el departamento de Estado por información que conduzca al arresto y condena de los ejecutores del ataque a los *marines*; hasta las recientes declaraciones del secretario de defensa, Caspar Weinberger, relativas a que la información suministrada al ejército salvadoreño por los servicios de inteligencia norteamericanos habría posibilitado el desmantelamiento de varios campamentos del PRTC y la captura y liquidación de

sus integrantes, entre ellos los estrategas del operativo de la Zona Rosa.

Si bien parece haber logrado resistir las presiones de la Casa Blanca para que fuerzas norteamericanas ejecutaran directamente acciones de represalias, el régimen democristiano se ha visto forzado una vez más a asumir una claudicante subordinación a los intereses estadounidenses, desplegando una intensa campaña judicial, policíaca y, sobre todo, verbal y publicitaria, para dar la apariencia de que el "brutal acto de terrorismo" no quedará impune. Dos días después de los sucesos, el viceministro de seguridad pública, coronel López Nuila, declaró que el gobierno salvadoreño había emprendido ya una exhaustiva investigación de aquéllos, en la cual estaban colaborando agentes del FBI; e informó que el ataque constituiría el "primer caso" de la comisión investigadora especial creada hace más de un año. Para no quedarse atrás, el nuevo fiscal general de la república, Dr. Santiago Mendoza Aguilar, informó haber instruido a tres fiscales específicos de turno para que investigaran las 24 horas los "atrocios hechos" de la Zona Rosa, de cuyas primeras diligencias se estaba ocupando el juzgado sexto de paz.

Además de manifestar su repudio hacia la "agresión marxista que sufre la patria," los partidos de oposición aprovecharon esta desproporcionada preocupación del gobierno democristiano por satisfacer las presiones justicieras de la administración Reagan, para recriminar al presidente Duarte "la falta de un verdadero gobierno que efectivamente gobierne con respeto a la ley" y "garantice la seguridad de los salvadoreños bien nacidos."

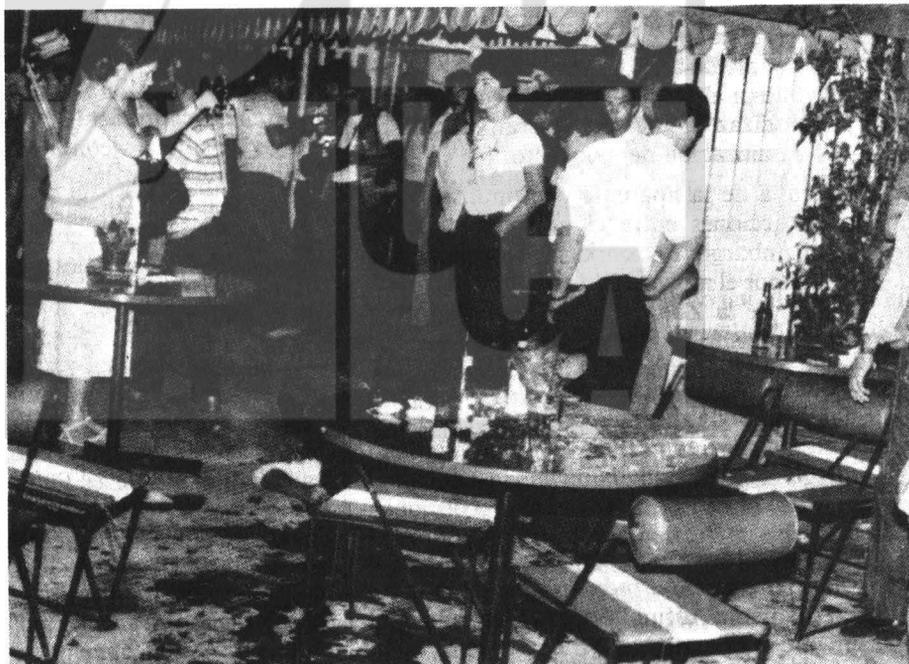
Por su lado, los sectores del gran capital, pese a sus resquemores y fricciones con la embajada norteamericana por el presunto apoyo brindado por ésta a los proyectos "socializantes" de Duarte, no pudieron menos de manifestar su afinidad de fondo con el ideario del presidente Reagan. Por si ello no bastara, la intempestiva presencia de la guerra en sus exclusivos lugares de diversión hizo saltar a la oligarquía con toda la "indignación moral" que suele suscitarle el "terrorismo," incluido bajo este término —como lo señaló el comunicado de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en abierta alusión a la efervescencia laboral desarrollada durante la coyuntura— el trabajo organizativo de aquéllos que programan "esta secuela de huelgas ilegales, tomas callejeras, manifestaciones, desórdenes y

demandas cuyo único propósito es provocar una situación de anarquía, desempleo y marginación social." Sintomáticamente, el incidente sirvió también a los sectores empresariales para confirmar "la tesis de que es imposible dialogar con los comunistas," reiterar su "firme posición de no diálogo" y exigir, como remate de una novedosa forma silogística de dudosa coherencia lógica, el "rompimiento inmediato de relaciones diplomática con el régimen sandino-comunista de Nicaragua, autor indirecto y directo de todo este tipo de acciones terroristas."

Desde esta perspectiva de opinión, no puede extrañar el paroxismo suscitado en la empresa privada por los ponderados esfuerzos de Mons. Rivera para iluminar pastoralmente el suceso. Contrariamente a como, en su ofuscación, lo acusó la derecha, el arzobispo condenó categóricamente el ataque del PRTC como "acto de terrorismo," pero al propio tiempo advirtió que "sería muy grave una condenación selectiva guiada por criterios ideológicos" y procedió a enmarcar el suceso en el contexto de la guerra que desangra al país. Denunció "hechos graves sucedidos durante el operativo que está en curso en el norte de Morazán" y sugirió que "sería hipócrita gritar ante el terrorismo de la extrema izquierda y guardar silencio ante el de la extrema derecha o el de la Fuerza Armada. Esperamos

que las voces que con tanta vehemencia se han levantado ante este asesinato masivo, no callarán ante otros hechos igualmente graves de que son víctimas muchos salvadoreños humildes." Por otro lado, manifestó que la acción debía ser interpretada como una "sacudida a la conciencia nacional y una llamada a la lucha por la dignidad humana;" y recordó —acusación que no le podrá perdonar jamás la oligarquía— que la Zona Rosa "es un signo de la indiferencia y despreocupación de muchas personas ante la tragedia que desangra al país" y "un escándalo por su ostentación en el despilfarro, si se considera cómo vive, o sobrevive, la mayoría de los salvadoreños."

Valoraciones tan audaces bastaron para concitar en su contra los epítetos más encendidos de la derecha. El Frente Femenino Salvadoreño calificó de "escandalosas" las afirmaciones del arzobispo; la juventud nacionalista de ARENA vio en ellas la expresión de una "actitud luciférica;" la Cruzada Pro-Paz y Trabajo reiteró su hastío por los "falsos mediadores y profetas" que "les hacen el juego a los comunistas;" y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expuso su preocupación por el "contenido político" de las homilias arzobispaes. No exageró, por tanto, Mons. Rosa cuando afirmó que "los ataques contra Monseñor Rivera desti-



lan tanta pasión y saña, que de allí a la agresión física no hay más que un paso." Sin embargo, la valiente actitud del arzobispo rindió pronto sus frutos. Además de la solidaridad que le manifestaron diversas comunidades cristianas de base y movimientos pastorales de la arquidiócesis, nuevas voces ampliaron el espacio de opinión abierta por él y se solidarizaron con su reiteración al diálogo, entre ellas la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y las Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria Integradas (ACOPAI).

Sea por solidaridad desinteresada con Mons. Rivera, sea por la común posición compartida con él como blanco de los ataques de la derecha, el presidente Duarte censuró también "la posición consecuente e insensata" rechazada por el pueblo en las urnas electorales, de "pretender solucionar el conflicto a punta de bala y de matar;" y acusó a tales sectores de instrumentalizar la homilía del arzobispo para "debilitar la posición moral de la Iglesia."

Retomando esta línea de argumentación, el ministerio de cultura y comunicaciones procedió a su vez a realizar su propia instrumentalización de la Iglesia, asegurando que, en contraste con los esfuerzos eclesiales y gubernamentales en favor del diálogo, las extremas derechas e izquierda "pretenden politizar a la Iglesia, pretendiendo desconocer su autoridad moral y deteriorar su papel como mediadora del conflicto," con lo cual "invalidan el respeto a los derechos humanos, profundizan la guerra y cierran las puertas para la humanización del conflicto."

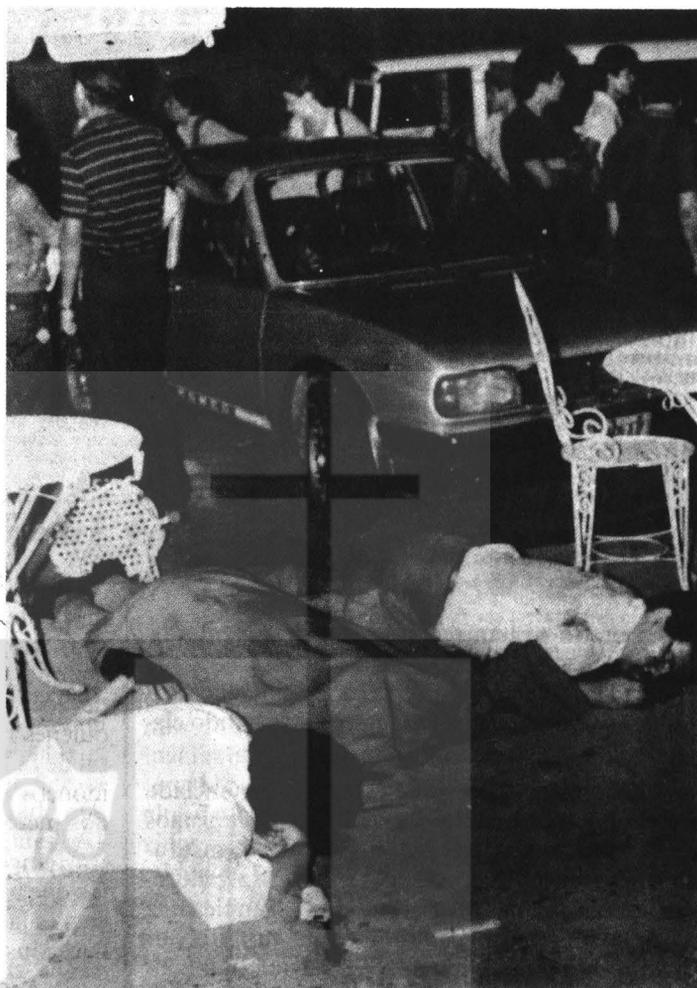
Más allá de la aparente profundización de las contradicciones entre el gobierno y la derecha, sin embargo, la campaña propagandística desplegada por el ministerio de cultura en torno a los sucesos de la Zona Rosa ha guardado una identidad de fondo con las principales tesis en las cuales el gran capital ha expresado su interpretación, particularmente en lo relativo a las conclusiones extraídas respecto del diálogo y a las acusaciones de desestabilización del "proceso democrático" descargadas sobre el movimiento de masas.

Así, en la misma línea de ANEP, la ASI y la Cámara de Comercio e Industria, un comunicado gubernamental difundido el 21 de junio expresaba que el operativo del PRTC "comprueba

y ratifica la manipulación política de ciertos movimientos sindicales que pretenden con sus acciones ser el complemento de la barbarie terrorista y asesina." En la misma línea también de la gran empresa privada, el gobierno concluía que "la decisión de los asesinatos cometidos en la Colonia San Benito es responsabilidad directa y compartida de los dirigentes del FMLN y FDR" y "pone en evidencia que las tesis invocadas por Ungo, Zamora y los comandantes subversivos en torno al diálogo no se sustentan en una concepción ética y moral," sino en una "concepción táctica" del diálogo. En respaldo de tales valoraciones, la comisión gubernamental de derechos humanos opinó que "no es posible conceder crédito a la buena fe de las agrupaciones alzadas en armas cuando expresan su deseo de dialogar."

Desde luego, no pueden tampoco pasarse por alto los riesgos políticos a los que el operativo del PRTC puede haber expuesto al FDR-FMLN en un momento en que, por añadidura, las fuerzas de derecha y los sectores más duros de la Fuerza Armada parecen estar conspirando con renovados bríos en contra del maltrecho proceso de diálogo. De otro modo no sería explicable el distanciamiento crítico que, al interior de la alianza revolucionaria, han manifestado el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) respecto del ataque a los *marines*. El MPSC llegó incluso a calificarlo de "acto terrorista," mientras que el MNR indicó que no aprobaba "todas las acciones que realizan algunos de nuestros aliados, como el caso de los hechos lamentables ocurridos" en la Zona Rosa, aún a riesgo de sufrir —como de hecho ha ocurrido— la interpretación de que "la pretendida unidad monolítica del FDR-FMLN es un mito que se está resquebrajando," como dijera Castillo Claramount; o de que tales críticas "muestran una confrontación interna" en los frentes, según lo expresara Duarte.

El Dr. Ungo ha respondido que el FDR es un "frente político que no asume, de por sí, ninguna acción militar... Creo que hemos evitado más cosas que las que Duarte puede evitar; y él sí es comandante de la Fuerza Armada, mientras que yo no soy comandante del FMLN;" pero el problema subsiste: la acción de la Zona Rosa ha mostrado también que, pese a los avances obtenidos en el proceso de unificación ideológica y militar de la alianza FDR-FMLN, los frentes ofrecen todavía fisuras donde el gobierno puede



introducir las cuñas de su voluntad de resquebrajar el diálogo.

Sin embargo, en última instancia, no cabe objetivamente responsabilizar al operativo del PRTC por el empujamiento del proceso de diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FDR-FMLN. El diálogo ha quedado empujado desde la reunión de Ayagualo, 7 meses antes de que los *marines* cayeran acribillados en la Zona Rosa. El ataque guerrillero, en todo caso, no ha hecho sino poner al descubierto la positiva voluntad de los poderes de derecha para discontinuar definitivamente el proceso de diálogo, así como la precaria posición de fuerza detentada por Duarte, en caso de que efectivamente deseara reanudarlos. Desde luego, el operativo ha brindado argumentos adicionales para justificar la postura de la derecha, pero no es difícil suponer que, en caso de no haber ocurrido, las perspectivas de

reanudar las pláticas no serían más esperanzadoras.

Junto a ello, el ataque de la Zona Rosa ha desenmascarado también, tanto en la administración Reagan, como en el régimen democristiano, los partidos de oposición y la gran empresa privada, el arraigado filisteísmo con que todos ellos definen el terrorismo, no en términos de su intrínseca modalidad destructiva, sino en razón de si se enfila o no contra las propiedades y las personas de un grupúsculo de privilegiados. Difícil será que, desde tal caracterización del "terrorismo," la destrucción de la vida y los bienes del pueblo salvadoreño pueda alguna vez ser denunciada como terrorista por los sectores que, ante los sucesos de la Zona Rosa, han manifestado tan descomunal consternación.

C.A.